

entrevista



Laura Martín Murillo

Directora del Instituto para la Transición Justa, MITERD

“Si la transición energética no se realiza y no se acelera aumentará la desigualdad social”

Desde mayo de 2020, la socióloga Laura Martín lidera el Instituto para la Transición Justa, organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cuyo objeto es la identificación y adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía más ecológica y baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario, minimizando los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación. Durante los dos años anteriores trabajó ya como asesora en asuntos relacionados con la transición justa en el Gabinete de la Ministra para la Transición Ecológica. Según muchos alcaldes de las zonas afectadas por la reconversión atesora una especial sensibilidad sobre el futuro de las cuencas mineras “para diseñar las alternativas al carbón” ya que Martín estuvo presente en todos los encuentros con los responsables de los territorios mineros y en sus visitas a las cuencas sometidas a transición.

Dirigió la Fundación Renovables y Sustainlabour y acumula sólida experiencia internacional y nacional en el diseño de estudios sobre economía verde, cambio climático, energía, gestión de residuos, sostenibilidad... ejecutando proyectos y liderando entidades en esas áreas y en el ámbito de la transición medioambiental y el cambio social. Además, es autora de numerosas publicaciones sobre economía y empleos verdes, transición justa, cambio climático y transición energética para la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas.

En 2013 formó parte de la negociación sobre desarrollo sostenible y empleos verdes en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, el primer acuerdo internacional entre gobiernos, empleadores y organizaciones de trabajadores en materia de transición justa. Una cuestión acerca de la cual es una de las voces más autorizadas del momento en el panorama técnico y político español.

Durante nuestra conversación, Laura se muestra especialmente preocupada —e insiste en ello en varias ocasiones— porque el impacto social más importante de la transición energética pueda ser el aumento de la desigualdad si la transición no se acelera.

— *El cambio hacia economías bajas en carbono tendrá claros beneficios para el planeta pero... ¿qué pasará con las personas?*

El cambio climático supone amenazas importantísimas para los ecosistemas, para la biodiversidad, para las especies, para lo que solemos llamar “el planeta”, pero lo cierto es que si lo pensamos bien, quienes estamos realmente en peligro

“Nuestro objetivo es la descarbonización completa de la economía, pero tenemos que hacer una transición eficiente basada en los derechos de las personas que no deje nadie atrás”

somos las personas. Del mismo modo la transformación, la descarbonización de nuestras economías, tendrá beneficios para el sistema natural, pero sobre todo supone garantías para protección de las personas y de sus economías y especialmente, para las más vulnerables.

— *¿Podríamos decir que justicia ambiental y social son las dos caras de una misma moneda?*

Efectivamente. Tiene que ver con los impactos: las comunidades y los países vulnerables que históricamente han contribuido menos al cambio climático actual se ven afectados de manera desproporcionada. Se trata de un problema de desigualdad y vulnerabilidad. De hecho, la relación entre desigualdad y cambio climático se caracteriza por ser un círculo vicioso, por el cual, la desigualdad inicial hace que los grupos desfavorecidos sufran una pérdida desproporcionada de sus ingresos y activos, lo que resulta en una mayor desigualdad posterior. Éste es el impacto social más importante de la transición energética. El impacto que se produciría sobre el aumento de la desigualdad si no se realiza y si no se acelera.

Sin embargo, por otro lado, la transformación de los sistemas energéticos también tiene impactos sociales a los que hay que prestar atención. Tenemos que diseñar la transición energética para abordar —en lugar de exacerbar— las desigualdades sociales, como una oportunidad para el progreso social. Por ello, las políticas destinadas a implementar esta transición también deben evaluarse respecto a la justicia social.

Este hecho ha sido un elemento de preocupación y de diseño de las políticas climáticas y de transición energética de manera tradicional. En algunos casos tenemos motivos para el optimismo, la introducción de renovables tiene buenos resultados para zonas remotas, las fuentes renovables descentralizadas, particularmente fotovoltaica, ha llevado la electricidad a zonas y hogares rurales que carecían de la misma. Del mismo modo, la eliminación de los combustibles fósiles que hemos acordado globalmente de manera clara en la COP de Dubai, tiene también que producirse mitigando los efectos adversos que provocará sobre sectores, territorios y personas, avanzando una transición justa.

— *¿Diría que la transición ecológica es el desafío social de este siglo?*

Más que un desafío social consideraría la transición ecológica una necesidad social. Una necesidad para la supervivencia de nuestras sociedades. ¿Que conlleva desafíos?... Sí, claro. Afortunadamente el contexto ha mejorado mucho: las soluciones tecnológicas están en marcha o gestándose las nuevas y, además, estas tecnologías van teniendo unos precios cada vez más competitivos que hace que se vayan imponiendo también por razones económicas.

Lo mejor además es que al contrario de con otras transiciones, como por ejemplo la digital, sabemos dónde que-



Laura Martín junto a Teresa Ribera en la comisión de minería en 2023

remos llegar. Tenemos un objetivo: la descarbonización completa de nuestras economías y respecto a este objetivo tenemos que trabajar para hacer la transformación eficiente pero basada en derechos y protegiendo a las personas, con participación social y sin dejar a nadie atrás.

— *¿Cuáles son los principales obstáculos para lograr una transición justa y cómo podemos superarlos?*

En mi opinión hay dos obstáculos fundamentales. El primero es no proponerse una transición justa. Si diseñamos estrategias de descarbonización sin pensar que tenemos que hacerlo protegiendo a las personas, los empleos, los territorios, es muy difícil que el resultado de esas estrategias sea positivo en términos sociales o que las estrategias tengan el suficiente apoyo ciudadano. Por eso es importante que la última cumbre de Dubai aprobara el programa de trabajo de Transición Justa.

El segundo obstáculo es usar la transición justa como una excusa para el retardismo. Es servir a la estrategia de que como necesitamos que los cambios sean justos, intentamos retrasarlos. Esta falta de anticipación no sólo impide desplegar una descarbonización mucho más ágil como necesitamos, sino que perjudica al final del camino a aquellos colectivos y territorios que dependen de las actividades que necesitan transformarse.

— *¿Cuál es el objetivo de las políticas públicas de transición justa (TJ)? ¿Y del Instituto que dirige?*

La transición energética hacia una economía descarbonizada recae con especial intensidad sobre determinados

grupos de población y en determinadas áreas geográficas concretas. En España esto se ha traducido en desarrollar en primer lugar un plan de acción urgente sobre territorios donde se cerraban las minas de carbón, las centrales térmicas de carbón y dos territorios nucleares.

El cierre del carbón es muy importante para la reducción de emisiones de nuestra economía. Cuando empezamos en 2018, la participación del carbón en nuestro sistema eléctrico era del 17 % con datos de 2017. En la actualidad está por debajo del 2% y estamos cerrando todas y cada una de las centrales. Pero más allá de las importantes ganancias en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, teníamos que trabajar en soluciones para que los directamente afectados apoyaran este cambio.

— *¿Cómo se ha hecho?*

Nuestro punto de partida fue acordar las condiciones con sindicatos y empresas sobre dos elementos: futuro para los trabajadores tanto directos como de las compañías auxiliares, recualificación y nuevos empleos y nuevos proyectos industriales en los territorios.

Además, hemos trabajado con una participación más amplia, a través de los convenios de transición en los que tuvieron espacio otros actores, asociaciones diversas, empresas de todo tipo presentes en los territorios, centros de formación, jóvenes, mujeres. El futuro se tiene que construir entre todos.

Y hemos conformado un espacio de gobernanza entre todas las administraciones, la central, las regionales, las locales. Hemos querido apoyar particularmente a entidades loca-



Visita de las labores de restauración ambiental de la mina Gran Corta Fabero durante el evento de alto nivel sobre transición justa que tuvo lugar en Ponferrada con ocasión de la Presidencia de España del consejo de la UE

les que tienen pocos recursos para definir su futuro aunque quieran.

— *¿Y soluciones concretas?*

Las soluciones que hemos canalizado han sido muy diversas. Hemos apoyado proyectos de nuevas empresas, proyectos territoriales y municipales para mejorar los servicios a la ciudadanía, hemos mejorado el medio ambiente de las zonas, hasta hemos impulsado proyectos culturales.

También hemos desarrollado innovación energética ligada a la transición justa, como el hecho de subastar los nudos de acceso a la red eléctrica a los mejores proyectos renovables desde el punto de vista de la transición justa: aquellos que generan empleos para excedentes del carbón, para mujeres; los que incorporaran autoconsumo para ciudadanos o empresas, y que sirvieran de tracción para nuevos proyectos industriales en esos mismos territorios.

— *¿Cuáles han sido los principales resultados?*

Desde el punto de vista social e industrial los resultados van a ser buenos. Donde se producía carbón habrá fábricas de paneles solares, de componentes de la eólica *offshore*, de reciclaje de paneles, de recuperación de palas de aerogenerador, de reciclaje de baterías de vehículo eléctrico; y en una de cada dos centrales (de las 15) hay proyectos bastante maduros de hidrógeno renovable.

Y hemos hecho mucho más. Hemos pensado en las personas. Se ha apoyado la recolocación y la recualificación de los trabajadores. Como ejemplo, el 90 % de los mineros que

“La transición energética, ecológica y justa es una necesidad social para la supervivencia de nuestras sociedades”

estaban inscritos en las actividades del ITJ están empleados en la actualidad.

— *¿Y las pymes afectadas?*

También hemos pensado en las empresas pequeñas. Se han concedido 90 M€ en ayudas para 450 proyectos, con un empleo asociado de 2.500 puestos de trabajo. Por otro lado, un ambicioso Plan de Restauración Ambiental está recuperando 3 700 hectáreas de antiguas instalaciones mineras, preparando los terrenos para nuevos usos —en diálogo con las comunidades locales— y contratando de forma prioritaria a excedentes mineros. Hemos aprobado también más de 200 proyectos municipales que mejoran el apoyo al empresariado, al turismo, a las infraestructuras sanitarias o a la vivienda social.

Sigue sin ser fácil y nos queda mucho camino por recorrer. Algunos proyectos están a punto de empezar a funcionar, otros empezarán su construcción en breve, otros están en diferentes niveles de autorizaciones y permisos. Pero nos ha servido para testar cómo puede hacerse una transición sin que los trabajadores sean los damnificados, sin que los territorios queden abocados a la desindustrialización, sin que las sociedades se revuelvan contra el Gobierno que lidera el cambio.



Visita de la nave Fuego Verde en la Térmica Cultural de Ponferrada durante el evento de alto nivel sobre transición justa organizado como parte de los actos de la presidencia de España del consejo de la UE

— *En ese camino por recorrer, ¿cómo podemos ser honestos y sensibles con todos los territorios?*

Éste ha sido uno de los elementos fundamentales que intentamos trabajar desde el Instituto para la Transición Justa. Hay que entender y enfrentar las dificultades específicas de los territorios para la transformación: por ejemplo, no es lo mismo la transición en zonas muy ruralizadas, donde determinadas instalaciones industriales tenían un efecto tractor sobre las economías o sobre colectivos de trabajadores específicos, como los trabajadores mayores.

Pero hemos querido ser honestos y centrarnos sobre todo en el futuro. Para poderlo apreciar con la suficiente perspectiva diré, por ejemplo, que en España —desde finales de los 90— se lleva trabajando en la reconversión del carbón. De los aproximadamente 15 000 M€ que gestionó el antiguo instituto del carbón (sobre el que se ha establecido el ITJ), menos de 3 000 M€ se invirtieron en futuro, en nuevas empresas o infraestructuras. El resto sirvió para apoyar a empresas que no eran competitivas en el mercado internacional o a los trabajadores. Desde 2019, el marco de transición justa se ha centrado en apoyar el futuro, de los 1 000 M€ que invertiremos hasta 2025 desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en empleo.

— *¿Qué papel tienen las mujeres en la transición justa?*

De acuerdo al informe *El empleo de las mujeres en la transición energética justa en España*, publicado por la Fundación Naturgy y el Instituto para la Transición Justa

en 2023, las mujeres han ocupado casi cuatro de cada diez de los nuevos empleos netos creados en el sector en los últimos años y se ha avanzado en la brecha de participación en los sectores de la producción de energía eléctrica, redes y autoconsumo y la eficiencia energética en el transporte y la brecha salarial de género en los sectores objeto del estudio es menor que la observada en el conjunto de la economía.

Son buenas noticias, pero queda un largo camino por recorrer y no sólo en España, sino también a nivel europeo. La principal brecha de género es la de la participación. En el año 2020 en la Unión Europea, el 19,7% de las personas ocupadas en estas actividades eran mujeres y en ninguno de los países miembros este porcentaje alcanzó el 30%, considerado el nivel de masa crítica. En España, esta participación se situaba en el 18,2% en 2022. Otra importante brecha de género es la segregación ocupacional. Las mujeres ocupan principalmente puestos de trabajo de carácter administrativo y su presencia en los puestos técnicos de alta y media cualificación (técnicos, científicos y directivos) es reducida, especialmente en puestos directivos, con menos de un 15%. Además, es importante destacar que las mujeres presentan altos niveles de sobrecualificación en los subsectores de la transición energética.

Situar a las mujeres como parte activa de la transición energética, tanto en el acceso al empleo como a la formación requiere del trabajo de todos los actores relevantes en el sector, incluyendo a la propia administración y las empresas, pero también los agentes sociales, investigadores y la comunidad educativa en su conjunto.

— *¿Y los jóvenes?*

La juventud es una voz fundamental transición ecológica justa. El futuro de las comunidades de transición justa depende en gran medida ellos. Queremos que se escuche su voz y que actúen como catalizadores del cambio. En este sentido, el proceso de transición justa es una oportunidad para que las personas jóvenes que viven en territorios que están siendo protagonistas de la transición energética formen parte activa de los nuevos proyectos e iniciativas empresariales, culturales, sociales y de otro tipo que surgen gracias al proceso de transición. Los jóvenes tienen la oportunidad de liderar ideas innovadoras que ayuden a abordar las desigualdades socioeconómicas y medioambientales de sus territorios y hacerlo creando empleo y mejores condiciones de vida.

Por ejemplo, pueden acceder a recursos financieros específicos para iniciar un nuevo proyecto empresarial en sus territorios, pueden formarse en las nuevas profesiones que surgen en el marco de la transición que les permitirá acceder a un empleo, pueden participar en los procesos consultivos derivados de las firmas los protocolos de actuación conjunta de transición justa que derivarán en nuevas inversiones en infraestructuras públicas en los municipios donde viven. La transición justa es el mecanismo que les permite trasladar sus ideas de mejora ambiental en realidades. Su capacidad para comprender, adaptarse, utilizar y desarrollar nuevas tecnologías y su disposición a asumir riesgos les sitúan en espacio central único para impulsar los cambios que necesitamos.

— *¿Cuáles son los siguientes pasos?*

El trabajo continuará en estos territorios y, aunque desde el ITJ se seguirán desplegando soluciones, se debe pasar a un mayor protagonismo de las CC AA. Las Autonomías tienen cuantiosos fondos europeos —casi 900 M€— para la transición justa del carbón, que empezarán a gastar ahora en 2024 y hasta 2027.

Lo desarrollado hasta aquí con la transición justa en estos territorios es una experiencia que tenemos que escalar desde el ITJ. Este año estamos trabajando en una nueva estrategia de transición justa. La ley de Cambio Climático y Transición Energética en España obliga a diseñar y aprobar estrategias de transición justa cada cinco años, así que en 2024 vamos a iniciar los trabajos en este sentido.

— *La estrategia del instituto también contempla el impulso a la cultura y el arte en los territorios afectados...*

Sí. Claro. Se ha desarrollado hasta un programa pionero vinculado a la cultura para jóvenes artistas en las zonas, que se llama Dinamizartj. No hemos querido dejar fuera la parte del cambio que tiene que ver con cultura e identidad, por eso, hemos apoyado casi 900 propuestas artísticas que han llegado a 80 000 personas en el último año.

“España es uno de los países que más ha aportado, o incluso el que más, a la integración de las políticas de transición justa en las políticas climáticas”

— *En comparación con otros países, ¿cuál es la aportación de España a la Transición Justa Europea?*

Hemos sido uno de los países, si no el primero en el ranking, que más hemos aportado por la integración de las políticas de transición justa en las políticas climáticas. Pero poco haremos desde España si no tenemos una acción concertada a nivel europeo. Precisamente hace un mes estuve en Bruselas para debatir con otros Estados miembros en un evento de la presidencia belga. Es evidente que las políticas de transición justa son y deben seguir siendo un elemento fundamental del Pacto Verde Europeo. Para incorporar este enfoque, no es suficiente crear fondos específicos —que son muy necesarios—, sino fortalecer una arquitectura institucional que integre elementos sociales en la agenda medioambiental y de descarbonización de la Comisión. En España, para avanzar, hemos contado con una Estrategia de Transición Justa o una institución específica para liderar el proceso. La transición justa no debería ser vista como una adición para evitar externalidades negativas, sino como un motor para proponer medidas coherentes entre las agendas medioambientales y sociales. Para lograrlo, todos nos beneficiaríamos si estableciéramos objetivos políticos europeos específicos.

— *¿Qué elementos considera que podrían amplificar el cambio a nivel estatal y europeo?*

Necesitamos acciones más allá de los Gobiernos mediante la integración del sector privado. Especialmente, las grandes empresas deberían incorporar estrategias de transición justa en sus estrategias de descarbonización, mejorando la transición para sus trabajadores, cadenas de suministro y su impacto en los territorios. Si retrasar la descarbonización nos lleva a activos varados, el fracaso en incorporar medidas internas de transición justa en las trayectorias de descarbonización de las empresas empeorará los resultados sociales y el apoyo de las personas trabajadoras. El sector privado debe anticiparse y proteger a sus trabajadores.

Además, los gobiernos y las administraciones necesitamos hacer nuestra agenda comprensible; necesitamos acercar a las personas a nuestra reflexión sobre los problemas, a la toma de decisiones y al diseño de las medidas a poner en marcha.

👤 **Charo Barroso**, directora Revista Ambienta